

# EL FORO VALENCIANO,

REVISTA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA.

Esta Revista se publica los días 1 y 15 de cada mes.

Se suscribe en Valencia en el centro de suscripciones plaza de la Constitucion, y en la imprenta de José Rius, calle del Milagro. Fuera, dirigiéndose á la Redaccion del *Foro Valenciano*, calle de Náquera, núm. 2, remitiendo el importe de la suscripcion en sellos de franqueo ó libranzas del giro mútuo. — PRECIO DE SUSCRICION: 3 rs. al mes en Valencia y 8 por bimestre fuera, franco de porte.

## Sobre la fuerza legal probatoria de las declaraciones en causa propia.

Si con la publicacion de esa Revista se ha propuesto la redaccion ir analizando todos los puntos de nuestra legislacion sobre los cuales existe alguna disparidad entre los Tribunales, para la aplicacion de las leyes escritas que reglamentan nuestros procedimientos, tanto en materia civil, como en materia criminal: si con este objeto ha publicado distintos casos prácticos, en los cuales por medio de un meditado juicio critico, espone las razones favorables ó contrarias que en su concepto han podido asistir al juzgador para dar ésta ó la otra interpretacion á la Ley escrita: si en nuestros procedimientos criminales existen algunos puntos legales que por mas claros que aparezcan en nuestros códigos, no dejan de presentar dificultades al tiempo de su aplicacion; creemos necesario irlos apuntando, para que abierta la discusion sobre ellos, se aclaren en cuanto sea posible y se haga patente la bondad de la ley, interpretada de éste ó del otro modo y aplicada á cada uno de los casos particulares, de la manera mas justa y equitativa para que no se cause ninguna clase de perjuicio á la sociedad, ni á los asociados, ni puedan guardarse los criminales á la sombra de la misma ley, quedando impunes los delitos que se cometieren.

Uno de ellos, y que á nuestro modo de ver es de los mas importantes en la legislacion criminal, es el que tratamos de esplanar en el presente artículo, y consignamos en la siguiente proposicion.

*¿Los dichos de los testigos en causa propia, cuando el delito que se persigue se ha cometido dentro de una casa, ó en un lugar cualquiera, donde consta no habia otras personas, que el ofensor y los parientes, criados ó dependientes de éste ó del ofendido, formarán una prueba tan completa, plena y acabada contra el criminal, como la formarian si no concurrieran en ellos las tachas de la ley?*

Nosotros no creemos haya inconveniente alguno en resolver afirmativamente esta cuestion, por mas que en contra de nuestras opiniones se alcen voces mas autorizadas que la nuestra y se emitan razones y argumentos mucho mas poderosos, en nuestro concepto mal escudado con nuestra legislacion de partida. Los dichos de los testigos parientes dentro del cuarto grado del ofensor ú ofendido ó bien criados ó dependientes de los mismos, forman una prueba tan plena y acabada como la pudieran formar si no fueran tales parientes ó dependientes de las personas interesadas en el éxito de la causa.

Mas no basta que nosotros lo afirmemos, no basta que dejemos sentada esta proposicion, es necesario que espongamos las razones que para ello tenemos y que analicemos nuestras disposiciones vigentes sobre la materia, para que se vea que al defender la afirmativa, lo hacemos con fé, escudados con la equidad, la razon y la justicia y aun si se quiere con la misma ley. Que la equidad, la razon y la justicia, se oponen á que no sean castigados con todo el rigor de la



ley los criminales contra los que no resulta en la causa otra prueba que la de testigos, en los cuales concurren las circunstancias de ser parientes, criados ó dependientes del ofensor ú ofendido, no es menester que nos esforcemos en probarlo, pues que la misma equidad, la misma razon y la misma justicia, nos hacen convencer de ello, á poco que meditemos sobre el particular.

Miles de egemplos podríamos consignar en este lugar en corroboracion de las ideas que emitimos, pero nos limitaremos ó presentaremos que por su sencilléz y claridad creemos convencer á los mas acérrimos defensores de la opinion contraria.

Juan se halla en uno de los gabinetes de su casa, en compañía de su esposa, hijos y demás familiares, y en él es atacado súbitamente por Pedro, que puñal en mano se dirige hácia él, clavándoselo en su corazon y produciéndole una muerte instantánea.

Incoada la correspondiente causa, no vienen al sumario á deponer sobre el hecho que la motiva mas que la viuda, hijos y familiares de Juan, ya porque es materialmente imposible que vengan otra clase de testigos, ya tambien porque si vinieran no podrian deponer sobre lo principal de ella, por ser un hecho que ha pasado aislado, por ser un delito cometido *intra domésticas parietes* y á presencia solo de personas que segun la opinion de algunos están inhabilitadas para declarar á *no hacerlo voluntariamente* como dice la ley. Por otra parte los testigos que deponen en esta *causa propia*, se hallan todos acordes y refieren hasta las mas insignificantes circunstancias que precedieron ó sucedieron á la consumacion del delito, y por lo tanto forman esa prueba *clara como la luz del medio dia*, que no dá lugar á dudar de quién sea el autor del delito que se persigue, tan recomendada y especialmente establecida por la ley 12, tit. 14, Part. 3.

Durante el plenario, sin embargo, se han tratado de alegar pruebas para aminorar la res-

ponsabilidad criminal en que haya incurrido Pedro, sin que se haya logrado otra cosa, que justificar hechos accesorios que en nada destruyen la naturaleza de la prueba consignada en el sumario. Ahora bien, ¿con esas pruebas *tan claras como la luz*, que no han sido destruidas por el tratado reo, pero nacidas de testigos parientes ó familiares del ofendido, podrá el Juez imponer al ofensor la pena de muerte establecida en el caso 1.º del art. 333 del Código penal para los reos de homicidio? Indudablemente: así lo prescriben la equidad y la razon, ante las cuales no se admiten ninguna clase de tachas, contra los testigos. Así lo prescriben la equidad y la razon, único termómetro donde se marca exactamente el grado de criminalidad en que incurre cada delincuente, segun los casos particulares bajo cuyo auspicio ha venido á consumarse el *mal fecho* que ha de castigar el Juez y ha de castigarlo *crudamente*, porque los *facedores reciban la pena que merecen*, á los que lo oyeren, se espanten é tomen ende escarmientos, porque se guarden de *facer cosa*, porque non resciben otro tal como dice muy sabiamente el entendido legislador de las Partidas en el proemio de la Partida 7.<sup>a</sup> Decimos que así lo prescriben la equidad y la razon por que si desechemos esta teoria, si admitimos la contraria, si proclamamos (siquiera va por un momento) la destructora idea de que los testigos en causa propia no pueden deponer ó no tienen sus dichos la fuerza legal probatoria que se les daría sino concurieran en ellos eso en nuestro humilísimo concepto mal llamada tacha abriríamos un vasto campo á los criminales por donde podrian transitar libremente sin que sus mas graves delitos fueran *escarmentados crudamente* como ordena y manda el mas sabio de nuestros legisladores.

Veríamos diariamente á los criminales blandir el puñal homicida no ya, en las calles y plazas donde no es difícil el poder encontrar testigos cuyos dichos obliguen á aquellos á subir las humillantes y tristísimas gradas del patíbulo,



sino en el mas retirado gabinete de nuestras casas donde, no existirían otras personas que vinieran á delatarles, mas que los padres, hijos, hermanos, parientes ó familiares del desgraciado contra cuya vida se habia atentado y cuya muerte no podia ser vengada por la sociedad, porque los testigos que habian depuesto en la causa, los que habian reconocido al agresor, los que le señalaban con el dedo, lo que se humillaban ante el juez pidiendo justicia y un *crudo escarmiento* para el criminal, estaban inhabilitados por la ley. Veríamos en fin repetirse diariamente, á todas horas, en todos los momentos, esos crímenes horribles que diariamente, llenan las columnas de nuestros periódicos y que rara vez encuentran su condigno castigo, por mas que se afanen los tribunales en que no sean ilusorias las disposiciones de nuestra ley penal.

Pero se nos dirá por los defensores de esta doctrina: os afanais en vano, todas vuestras razones, todos vuestros esfuerzos, todos vuestros argumentos se desvanecen como el humo, si delante de ellos consignais la terminante disposicion de la ley, ante la cual deben callar la equidad y la razon. Porque ella es solo la justicia. Convenido; la ley es la justicia. Los fallos arreglados á ella son los mas justos. Pero ¿dónde está esa ley? ¿En que código la encontráis impresa? ¿Que legislador la ha sancionado? Ninguno. Decimos que ninguno porque si bien la ley 18, tit. 16, pág. 3.<sup>a</sup> prescribe terminantemente *que ninguno non puede ser testigo en un pleito, nin los que estuvieren en su poder, non pueden testiguar por él* esta ley no puede tener aplicacion del presente caso porque solo se refiere á los pleitos civiles y si se estiende á los criminales no será hasta aquellos en donde no haya otros testigos que puedan deponer mas que los parientes ó dependientes del ofensor ú ofendido. Y no se estrañe la opinion que acabamos de emitir, no, supuesto que para convencerse de su verdad basta solo fijar la atencion en otras disposiciones ó mandatos del

mismo legislador, que en nuestro concepto deben tener una aplicacion mas razonable, equitativa y justa á casos como el presente. Una de ellas es la ley 9, tit. 30, Part. 7.<sup>a</sup> La cual dice terminantemente: «Personas ciertas son á quien non pueden apremiar que vengan decir testimonio contra otro en pleito que pueda venir *muerte ó pedimento de miembro*, si ellos de su voluntad, é sin ningun apremio, non quisieren venir á decir lo que supieren sobre aquel fecho, porque oviesen á dar testimonio. E estos son todos los parientes que suben ó descenden por linea derecha fasta el cuarto grado, etc.” Si pues el legislador prescribe en esta ley lo mismo que en la 10 y 11 tit. 16 part. 3.<sup>a</sup> las personas que no pueden ser apremiadas á declarar en causa criminal; si éstas son las comprendidas dentro del cuarto grado de parentesco, si al final de la ley 11 antes citada manda que *si alguno de ellos de su grado, é si premia ninguna quisiesse dar en testimonio, quando gelo demandase bien lo podria fazer: é valdrá lo que dijere, bien assi como sinon oviese ninguno debdo con él* es visto que lo prescrito por la citada ley 18 tiene solo aplicacion á los pleitos civiles y no á los criminales como hemos manifestado anteriormente. Y no puede menos de suceder así; el legislador de las partidas que quiere terminantemente que los *malos fechos*, sean *escarmentados crudamente* no podría dejar abierta en su obra inmortal una callejuela tan perjudicial para la sociedad, como útil y benefíciosa para los delincuentes. Por eso no ha escludido de deponer en las causas criminales á los testigos dentro del cuarto grado, por eso se ha limitado muy sabiamente á mandar que no fueran apremiados á declarar en las causas contra sus ascendientes ó descendientes; por eso, en fin, ha prescrito y lo ha prescrito con arreglo á las sanas doctrinas de la jurisprudencia criminal, que cuando estos testigos declararan *de su grado é sin premia ninguna, quando gelo demandavan* su dicho tenga la misma fuerza y valor legal, que sino fueron parientes



del ofendido ú ofensor, contra quien vienen á deponer.

Pero avancemos mas, estendamos la cuestion hasta sus verdaderos límites y dilucidemos sobre el punto radical de la proposicion cuya afirmativa defendemos.

Hasta el presente no hemos hecho otra cosa mas que investigar, analizar y profundizar hasta donde nuestras escasas fuerzas nos han permitido, el valor legal de las disposiciones de los testigos que verdaderamente declaran en causa propia. Mas no es esto solo lo que nos hemos propuesto. Réstanos examinar, para dejar cumplida nuestra tarea, la fuerza legal que pueden tener las deposiciones de los testigos parientes dentro del cuarto grado, ó dependientes de la persona ofendida.

Inútil creemos será que digamos que todo cuanto hemos espuesto respecto de los parientes y dependientes del ofensor, tiene aplicacion á los parientes y dependientes de la persona ofendida: con mucha mas razon cuando respecto de esta clase de testigos no hemos encontrado, por mas que nos hemos afanado en buscar la disposicion legal ninguno que ponga la mas leve traba á la fuerza y valor probatorio de sus dichos. Y no puede menos de ser así, porque de lo contrario nos veríamos privados de uno de los medios mas eficaces para el descubrimiento de los criminales como es la declaracion de la persona ofendida única que en muchos casos nos puede designar al delincuente. Y esta es otra razon que viene á justificar lo que antes hemos manifestado de que no habia ninguna ley que impidiese declarar en causa propia á los parientes dentro del cuarto grado de la persona ofendida ni aun á los parientes del mismo ofensor.

Más nos detendríamos en discurrir sobre esta materia, pero el temor de ser difusos nos retrae de hacerlo y de continuar analizando otras muchas leyes que esclarecieran mas y mas la afirmativa de la proposicion que venimos defendiendo.

No obstante con lo poco que hemos dicho,

creemos haber discutido suficientemente esta cuestion, y hasta haber probado plenamente que la *causa propia* no disminuye en nada el valor legal y la fuerza probatoria de los dichos de los testigos, parientes dentro del cuarto grado, ó dependientes del ofensor ú ofendido. Si nos hemos equivocado no será por falta de deseos de acertar, ni por vano alarde de escribir.

José Marco y Romero.

## DERECHO ADMINISTRATIVO.

### ARTICULO III.

La esfera de la accion administrativa en cuanto tiende á proteger los intereses publicos, naturalmente debe de ser mas dilatada, y abrazar mayor número de actos jurisdiccionales, que en cuanto se ocupa de la aplicacion de las leyes, en aquellas ocasiones en que el derecho reclamado por un particular esté en abierta oposicion con los intereses colectivos. Y decimos que naturalmente ha de ser mayor, porque el orden de las sociedades, su conservacion, mejora y engrandecimiento así lo exigen. Siendo peculiar de la administracion proveer á todo cuanto sirve á la vida del cuerpo social, incúmbele la egecucion de las leyes protectoras que la fomentan, para lo cual reúne la facultad de dictar reglamentos que no las alteren ni modifiquen, sino que las completen armonizando su observancia: incúmbele disponer de la fuerza pública, para que no se oponga obstáculo alguno á su egecucion: incúmbele vigilar por la seguridad de las personas, escudar la propiedad, reprimir las usurpaciones del dominio público, guardar los establecimientos penales y los de beneficencia, prevenir las públicas calamidades, y atender con preferente afán á aminorar sus consecuencias: incúmbele, finalmente, fomentar la agricultura, industria y comercio, y satisfacer las necesidades intelectuales y morales de los pueblos; de modo, que no hay funcion alguna por insignificante que



aparezca en el cuerpo social, que no pueda y deba ser regulada por la administracion, con mas ó menos eficacia, cuanto mas ó menos ancha sea la base de libertad sobre que descansa el sistema político.

Pues cada uno de los diferentes objetos que hemos enumerado, engendra y produce como derivaciones otros muchos, los cuales son atendidos por la administracion, para que no empiece por ellos el desequilibrio de las fuerzas sociales, que llevaria en pos de sí el trastorno y aniquilamiento de la sociedad misma; y véase cuán grande se presenta el horizonte administrativo, cuán dilatados sus espacios, y cuán inmenso su predominio; y cuando se haya comprendido todo en conjunto y abarcado en sus ramificaciones, entonces se tendrá conocimiento exacto de la esfera administrativa, y de la extension de la jurisdiccion voluntaria, jurisdiccion que no puede cercenarse en las autoridades gubernativas, porque los incidentes se presentan variados á cada paso y á cada momento, y seria imposible tener leyes preparadas para cada evento. Esta es la razon porque la jurisdiccion voluntaria es discrecional, sin mas limitacion que la que constituye la justa defensa de los intereses públicos.

No así puede ni debe ser la jurisdiccion contenciosa. Reducida ésta á entender y fallar las cuestiones en que no ha habido avenencia entre la administracion activa y los particulares, teniendo que sujetarse á formas de tramitacion preestablecidas, y fundar sus sentencias con arreglo á lo alegado y probado por cada una de las partes, precisamente depende su accion y ha de moverse á impulsos, no de su voluntad propia, sino del ciudadano que pretenda sostener ó vindicar sus derechos; y como no puede existir contienda sino cuando dos quieren litigar, tan luego como uno de ellos desista, cesa en sus funciones la accion contenciosa, por no serle dado empezar, ni seguir, ni ultimar de oficio los pleitos, contra el desistimiento voluntario del agraviado.

Encuétrase además de la espuesta otra notable diferencia entre la jurisdiccion administrativa voluntaria y contenciosa; diferencia que deriva de la naturaleza intrínseca de las cosas sobre que deben entender y fallar. La jurisdiccion voluntaria produce derechos que entonces son completos, cuando ha cesado definitivamente la accion administrativa. Así, por ejemplo, en la formacion de las ordenanzas de riego de un canal ó acequia, los derechos que en ellas se consignan relativamente al modo y manera con que los predios han de disfrutar el beneficio, se consuman y adquieren el carácter de inviolabilidad desde el momento en que han sido aprobadas por la administracion. De este principio derivanse las consecuencias siguientes: *primera*, que los actos de jurisdiccion voluntaria pueden enmendarse y aun cambiarse en su esencia, mientras no produzcan derechos consumados: *segunda*, que sean, generalmente hablando, discrecionales las formas de tramitacion, sin poder ser apremiada la administracion á entender de una manera fija y determinada, ni á fallar dentro de términos fatales, á no ser en aquellos asuntos en los que la misma ley ha reglamentado el ejercicio; y *tercera*, que se pueda siempre pedir á la autoridad superior la reparacion del daño inferido por actos administrativos de un agente inferior, y que se pueda pedir sin sujecion á cuantía, ni á plazos de tres, cinco ó diez dias.

La jurisdiccion contenciosa gira sobre un centro mas circunscrito, mas caracterizado, mas definido por la ley. Del mismo modo que la jurisdiccion ordinaria no crea derechos, sino que aclara los adquiridos por medio de la aplicacion recta de las leyes, así la contencioso-administrativa no dá origen, sino que adjudica los con anterioridad conquistados. Guiados por este principio nuestros legisladores, al crear y organizar los tribunales contenciosos, han trazado la misma senda que siguen los tribunales ordinarios, sujetándolos á formas de tramitacion, que son la garantía de los litigan-



tes. Más aun, han establecido indirectamente el ventajósísimo remedio de la avenencia, que tan buenos resultados produce, evitando un sinnúmero de pleitos, origen de disensiones y de ruina para las familias, y cortando de raíz los gérmenes de discordia. Por estas razones, para que pueda darse cabida al ejercicio de la jurisdicción contenciosa se requiere: *primero*, que preceda una providencia administrativa, es decir, que se haya acudido á la administracion activa, y ésta negado la solicitud ó reclamacion: *segundo*, que se funde la reclamacion de la providencia en un derecho menoscabado con anterioridad á la providencia; y *tercero*, que la reclamacion se refiera á intereses del orden administrativo.

Los requisitos que hemos señalado como indispensables para el ejercicio de la jurisdicción contenciosa, tienen su razon de ser altamente filosófica, y pueden reducirse á una fórmula bastante inteligible y concreta. Los derechos de interés administrativo menoscabados ó perjudicados con anterioridad á una providencia que no los subsana, deben ventilarse ante los tribunales contencioso-administrativos. Enunciado de esta manera el principio que entrañan las reglas enumeradas, con facilidad se comprende la distancia que media entre una y otra jurisdicción, y proporciona medios fáciles al abogado para aplicar su buen juicio á la direccion de los negocios.

Pero podrá decirse, que dentro de esa fórmula hay términos de difícil apreciacion: nosotros lo confesamos, si bien comprendemos, que no es la precision del lenguaje empleado, sino la carencia de principios apurados la que produce la vaguedad de la frase *interés administrativo*; y ora sea que no se hayan aun desarrollado bastantemente las reglas constitutivas del derecho administrativo, ora que se haya escapado á la investigacion filosófica su principio generador, lo cierto es que inútilmente pugnaríamos en ocultar la ambigüedad de las expresiones, y nuestra impotencia para concretar-

las. Nosotros creemos que varias de las atribuciones concedidas á la jurisdicción administrativa, y en las que obra ésta como competente en virtud de disposiciones especiales, han de rescatarse algun dia de su influencia, y pasar á los tribunales ordinarios; y tal creencia nace de la causa misma que vamos asignando, á la falta de precision de los términos que forman el diccionario administrativo.

Sin embargo, la diferencia que existe entre la jurisdicción voluntaria y la contenciosa, el modo de proceder de las autoridades segun ejerciten la una ó la otra, marcan oportunamente la línea que separa el interés colectivo que protege la administracion, del interés privado cuyas cuestiones decide el poder judicial; y esto basta por ahora á comprender el sentido de la frase, que no puede menos de entrar en la enunciaci6n del principio que engendra la jurisdicción contenciosa.

No queremos con esto decir, que puedan resolverse á la luz de estos principios todas las cuestiones que se susciten entre ambos poderes, ni que sean ellos suficientes por sí á calificar los actos correspondientes á cada uno; porque si así fuera, no se podria decir, como con sobrado fundamento se dice, que el derecho administrativo no ha llegado entre nosotros á aquel grado de perfeccion indispensable para formar una ciencia. Lo hemos dicho ya en otro de nuestros artículos: estamos en la época de los experimentos; éstos y solo éstos nos guiarán al descubrimiento de los principios fundamentales. El error ha servido en muchas ocasiones para encontrar la verdad. *De las tinieblas á la luz.*

Cuantas veces hemos meditado sobre lo que hoy escribimos, otras tantas nos ha asustado el cargo abrumador que echan sobre sus hombros las personas encargadas de la administracion, cualquiera que sea su gerarquía. Por una parte el cúmulo inmenso de negocios que llama su atencion y vigilancia, el poder discrecional de que se hallan revestidos, y del que fácilmente



pueden abusar estralimitándose, por mas que empleen todo el celo y cuidado posibles; por otra la discordancia y muchas veces la incoherencia de las disposiciones que se dictan; y finalmente el hábito contraído de considerar competente al juez que mas en contrato está con nosotros, hacen del alto y honorífico encargo de representante de los intereses colectivos de la sociedad, un puesto rodeado de dificultades sin cuento, que solo el trabajo ímprobo, la constancia á prueba y la asiduidad incansable pueden superar, y por lo que nunca lo consideraremos bastantemente retribuido.

Felix Gomez La-Casa.

#### REMITIDO.

Sres. Redactores del *Foro Valenciano*.

Muy Sres. míos y de mi mayor consideracion. Ruego á ustedes se dignen dar cabida en su ilustro periódico á las siguientes líneas, en contestacion al artículo inserto en el núm. 7.º del primero del corriente mes, en el que Don Joaquin Alvarez de Morales sustenta que, la prision correccional caso de resultar insolvente el penado, nunca ni bajo ningun concepto puede exceder de 30 dias.

En el art. 24 del Código se comprenden, abrazando en una escala general, todas las diferentes clases de penas que pueden imponerse. En el 79 se insertan separadas en cuatro escalas graduales aquellas mismas penas para su aplicacion, segun las diferentes especies de delitos. Las de arresto mayor, caucion de conducta y suspension de algun cargo público, derecho político, profesion ú oficio, son las últimas de cada una de aquellas escalas, pero hay otra que es la multa, pena señalada en el art. 82 como inferior aun á la última de las anteriormente indicadas. Cuando se imponga, pues, como á tal, es decir, inmediatamente como infe-

rior á la última de todas las de las escalas graduales, en este caso, segun el párrafo 7.º de dicho art. 82, la prision por via de apremio establecida en el 49 no podrá pasar por lo respectivo á la multa de 30 dias. Por ejemplo: Cometido un delito de lesiones menos graves con dos ó mas circunstancias atenuantes muy calificadas y ninguna agravante, la pena de arresto debe rebajarse á la inmediatamente inferior que es la multa, y caso de insolvencia, la prision no excederá de 30 dias.

Esto es muy lógico, porque la duracion de las penas de arresto mayor, y la de suspension comienzan desde un mes, y la que sustituye á la caucion de conducta cuando no la diere el penado, es la de arresto menor, de modo que considerada la multa como inmediatamente inferior, claro es que no debe exceder de 30 dias, puesto que de otro modo seria tan crecida como la inmediata superior.

Pero la multa no es siempre considerada para su aplicacion como la pena inmediatamente inferior á todas las de las escalas graduales, sino que tambien es pena comun á las tres clases de que se compone la escala general del art. 24, á saber, á las afflictivas, á las correccionales y á las leves. Así es que se impone, ya sola, ó bien acompañada de otras penas en los delitos contra la religion, en los de Lesa Magestad, atentados contra autoridades, etc. Pues bien en estos casos, comprendida como las demás penas al tratarse en el tit. 3.º, cap. 3.º del libro 1.º del código de la duracion y efectos de las penas, el periodo de la prision correccional por via de sustitucion y apremio cuando el penado no tenga bienes para satisfacer la multa, puede ser hasta de dos años, escepto si se le han impuesto tambien 4 años de prision ú otra mas grave, como así lo dispone claramente el art. 49.

En esto tambien es lógica la disposicion legal anterior, porque impuesta la multa como pena v. g. correccional, si la prision en sustitucion por insolvencia no pasara de 30 dias, cam-



biaria su naturaleza porque degeneraria en leve, lo cual seria un contra principio. Por ejemplo: En el delito de lesiones menos graves sin circunstancias agravantes ni atenuantes, deben imponerse al agresor, pena correccional de tres á cuatro meses de arresto mayor, ó el destierro, ó multa desde 20 duros. Si el juez elige la multa y le impone 60 duros, caso de resultar insolvente, en sustitucion sufrirá cuatro meses, pena correccional; pero si no escediera de 30 dias la pena ya seria leve. Y de que la ley no lo quiere así es prueba el haber fijado en 20 duros el minimum que en este caso puede imponerse, pues de otro modo la habria reducido á 15 para que pudiera ser 30 dias la sustitucion por insolvencia, á razon de un dia por cada medio duro que dejara de satisfacer.

La Audiencia del territorio, y el ministerio fiscal respectivamente en sus fallos y dictámenes han hecho aplicacion en los términos indicados, de lo dispuesto en el art. 49, y en el párrafo 7.º del 82, sin encontrar entre una y otra disposicion, contradiccion que lo impidiese, porque cada una es para caso distinto de la otra. Si bien es cierto que en el código de 1848 como que el art. 82 no contenia el indicado párrafo 7.º llamaba la atencion el que pudiera elevarse siempre la prision correccional subsidiaria de la multa á una altura igual ó mayor que la pena inmediata superior, tambien lo es que esto no trascendió á la práctica, pues los Tribunales cuidaban de no imponer multas que escedieran de 15 duros cuando la aplicaban como pena inmediatamente inferior á la última de todas las de las escalas graduales, á fin de que la prision no pasara de 30 dias. Adicionado como ahora se halla el art. 82 en el código reformado de 1850, ya no puede haber duda alguna, pues el no haber hecho estensiva la escepcion que contiene (la de la multa) á las demás responsabilidades pecuniarias de que habla el art. 49, demuestra clarísimamente que se contrae solo á la multa, cuando ésta se impone como pena inmediatamente inferior á todas las

de las escalas graduales, pero no cuando se aplica como pena principal ó comun á las demás clases de que se compone la escala general del art. 24, en cuyo caso, así como el resarcimiento de los gastos del juicio, reparacion de daños, é indemnizacion de perjuicios queda en su fuerza el art. 49. De manera que lejos de ser dicha adiccion una redundancia como se cree por alguno, es una esplicacion que facilita la aplicacion de lo que anteriormente venia practicándose, no siendo por lo mismo el art. 82 una letra muerta como se supone, si es que se considera vigente el 49 en la parte á que se ha hecho referencia.

Queda de ustedes atento seguro servidor.  
Q. S. M. B.—F. S.

Felix Gomez La-Casa:

## Tribunales.

DISCURSO pronunciado por D. Joaquin Melchor y Pinazo, Regente de la Audiencia territorial de Valladolid, en la solemne apertura del Tribunal, verificada el dia 2 de Enero de 1858.

### Conclusion (1).

Si quereis ver lo que el espíritu humano ha adelantado en materia de legislacion criminal, observad la distancia que media desde la pena del talion hasta las tan moderadas y justas que vemos señaladas en los códigos de la edad presente. «Os han dicho hasta ahora, ojo por ojo, diente por diente; mas yo os digo: Amad á vuestro enemigo....» Desde que resonaron estas palabras en el famoso monte de Galilea, no ha podido desconocerse su poderosa influencia en las instituciones y en las costumbres de las sociedades modernas. A ellas se debe la desaparicion de las mutilaciones y de la marca, como de tantas otras penas degradantes é infamatorias; que las penas se impongan respetando en el hombre la imagen de su Criador; que no tengan por objeto destruirle, sino corregirle y mejorarle. Hubo un tiempo en que el castigo no era otra cosa que la venganza transportada del individuo á la sociedad; volver mal por mal para reprimir por la destruc-

(1) Véase el núm. 7.º



ción y por el terror: la pena infamaba y desesperaba no solo al culpable sino hasta su cuarta ó quinta generacion. Hoy es la expiacion de la culpa en la purificacion del delincuente, que sirve de ejemplo á los que todavía no han delinquido, y al mismo tiempo repara el daño causado por el delito. Se impone solo por la perturbacion del orden moral causada con intencion; en mayor ó menor escala, segun la magnitud é importancia de esta perturbacion; sigue paso á paso todos los grados de la criminalidad, y se proporciona en cuanto cabe á la intensidad de los móviles que han impelido á delinquir. Así es como reprime y previene al mismo tiempo. En otras épocas se hacian delitos de acciones mal definidas, de naturaleza dudosa, tal vez inocentes, y que no estaban al alcance de investigacion alguna. Se forjaban delitos que solo existian en las nebulosas regiones del fanatismo. Hoy solo se pena la verdadera transgresion de la ley moral, cuando está al alcance de la justicia humana.

Pues no es menos digno de atencion el cuadro que ofrecen los procedimientos y los juicios desde la infancia del género humano hasta nuestros dias. Desde las primitivas y sencillas formas en que administraban justicia los patriarcas en el seno de sus familias, y que comportaban muy fácilmente la simplicidad é inocencia de un gobierno doméstico, ¿cuánto no ha tenido que sufrir la misera humanidad para llegar á la administracion racional y concienzuda de la justicia? No están muy remotos los tiempos de las guerras privadas, en que no solo era tolerado sino permitido á los individuos, á familias y barrios enteros vengar los agravios propios y los ajenos, cuando mediaba alianza: en que eran tantos los crímenes que se cometian y la sangre que diariamente se deramaba, que dos ó tres dias de tregua en estos desafueros á la semana, se tenian por un grande alivio, á que se dió el nombre de Paz de Dios. Bien conocido es lo que se llamó, y era realmente, el precio de sangre unos cuantos maravedises por los que se redimian los mas atroces delitos, hasta el fratricidio, segun la clase de la persona de quien procedia la ofensa. ¿Pensais que la inocencia contase entonces con muchas garantías para defenderse en juicio de sus agresores? Las pruebas del agua hirviendo, del hierro candente, el combate singular, la cuestion del tormento, y por otra parte la ocultacion del delator y de los nombres de los testigos, la ninguna publicidad en los juicios, y sobre todo el tenáz empeño de

hallar mas bien delitos y delinquentes que descubrir los lazos que pudieran tenderse á la inocencia, os responderán á esa pregunta. Las sentencias raras veces debian de ser la expresion de lo verdadero y de lo justo.

Pues volved ahora la vista á los tiempos presentes. Ya no se disputa siquiera sobre la publicidad de los juicios, sobre la igualdad de condiciones entre el demandante y el demandado, el acusador y el reo: al ministerio público le está encargada, con respecto á uno y otro, la severidad é imparcialidad de la misma ley: las pruebas no son impuestas sino buscadas por los medios mas conformes á la razon; y una lógica facticia, fundada en errores y añejas preocupaciones, no viene á interponerse entre la verdad y la conciencia del Juez para hacerle desvariar en sus fallos: la sentencia es el resultado del mas concienzudo exámen y graduacion de las pruebas segun las reglas de la crítica racional y una satisfaccion que se dá á la conciencia pública de las razones que ha habido para dictarla y de los motivos que tiene para acatar la autoridad de la cosa juzgada. Nada de esto puede ya ponerse en cuestion. Ya no se disputa sino sobre si debe darse la preferencia al juicio oral sobre el juicio escrito, á los Tribunales colegiados sobre los unipersonales: á ésta ó á la otra forma de sustanciacion en el sistema que se elija; sobre la economía de gastos y de tiempo; sobre cuál sea el mas corto y espedito camino para llegar al descubrimiento de la verdad y de la justicia, objeto único y exclusivo de todo procedimiento judicial. Y cualquiera que sea la opinion que se tenga sobre el atraso en que todo esto se encuentra, y los progresos que puedan hacerse en lo sucesivo, el espíritu humano respira ya de tanta fatiga y descansa en la persuasion de que ya no puede volver á las tinieblas de la edad media, de que nada puede hacerle perder las garantías que ha conquistado, y la esperanza de obtenerlas mayores en el porvenir.

Y si por otra parte no debe perderse de vista aquella sentencia de Platon: «Nihil leges sine moribus,» la civilizacion moderna viene á librarnos de toda zozobra y á confirmarnos en esta esperanza. Pasaron los tiempos en que un Marco Bruto daba al mundo el feroz espectáculo de un padre desnaturalizado, que, en vez de abstenerse, como debia, de juzgar en causa propia, hacia alarde de condenar á muerte á su propio hijo por un delito político: en que un fraticida apelaba de



su sentencia á las pasiones de un pueblo alborotado y frenético, y obtenia por los servicios prestados á la república la absolucion del asesinato de su infeliz hermana. Ya no es concebible siquiera un Tribunal tan imbécil como el que condenó á beber la cicuta al padre de la filosofía griega, porque tuvo el valor de afirmar, reinando aun el politeísmo, la existencia de un solo Dios: ni jueces tan débiles, ni auditorio tan corrompido, que püedan en su presencia ostentarse como último recurso de su defensa los atractivos de una muger que les descubrió su seno para conmovellos y fascinarlos. Desde que resonó en todos los ámbitos de la tierra la voz del que tan elocuentemente nos habló á todos en la cima del Cólghota, ya no es posible que se repitan estas escenas. Su doctrina estará siempre ahí para protestar contra todo linage de injusticias: en ella está el gérmen de todo lo verdadero, de todo lo bueno, de todo lo justo.... Ella inició al género humano y es la que le conduce en la reforma de sus instituciones, sus leyes y sus costumbres. No hay máxima alguna moral ni política, cuyo gérmen no se halle en el Evangelio, ha dicho un escritor célebre de nuestros dias. Será una ley providencial que no todo se haga en un solo instante, que la especie humana marche gradualmente y paso á paso hasta el último grado de perfeccion posible; que no todas las naciones y todos los individuos entren de una vez á sentarse en el banquete de la vida; pero ello es cierto que para vencer es necesario afanarse y luchar; que solo al que se afana y persevera en la lucha es á quien está reservada la palma de la victoria.

Por causas de todos bien conocidas, nuestra patria no ha sido de las primeras en participar del gran movimiento que impele á los adelantos de toda especie á las naciones modernas en el presente siglo; y puede decirse será la última que llegue á cierto grado de perfeccion en sus instituciones judiciares. Cuarenta años de guerras y de convulsiones políticas y entre ellas una guerra dinástica, que lo ha sido tambien de principios, han privado á la nacion y al Gobierno de la calma y detenimiento que ha menester para ocuparse de este importante ramo de la organizacion interior de un Estado. Mas al presente, tiempos mas bonancibles y el iris de paz que al fin se ha mostrado ya en nuestro horizonte político, ahuyentando los restos de pasadas tormentas nos permitirán fecundar las semillas que de mucho tiempo á esta parte han ido esparciendo doctos y virtuo-

sos patricios que han querido allegar materiales á la obra ya comenzada de nuestra regeneracion en todos sentidos. Bajo el cetro del nuevo Alfonso que acaba de dar á luz nuestra adorada Reina, y que ha de suceder no solo en el cetro sino tambien en la sabiduría y la gloria de su augusto predecesor Alfonso décimo, tendremos con el ausilio del cielo una nueva reforma del Código penal ya vigente, el Código civil proyectado, una ley de procedimientos criminales, como ya la tenemos de Enjuiciamiento civil, y una definitiva organizacion de Tribunales cual será necesaria para que corresponda á las anteriores reformas y para que todo nos ponga al nivel de las naciones mas cultas de Europa. ¡Plegue al cielo dilatar y prosperar los dias de nuestra amada Reina Isabel II y de su augusto hijo el futuro Alfonso XII para que puedan cumplirse nuestros ardientes votos, y la nacion española será regida en paz y justicia, que es el *desideratum* de las naciones que llegan á comprender en lo que consiste su verdadera felicidad! HE DICHO.—Joaquin Melchor y Pinazo.

## Crónica de los Tribunales.

### CASO PRÁCTICO.

Pascual Ibañez acudió al Juez de primera instancia del distrito de Lucena, en queja de D. Vicente Bernad y Miravet, alcalde del pueblo de Argelita, porque supuso se habia negado á celebrar el oportuno juicio de faltas, por las amenazas con que Juan Soriano le intimidó al pasar por cierta senda.

El Juez instruyó el sumario del modo que tuvo por conveniente; y sin mas que dar cuenta al Sr. Gobernador Civil de la provincia de Castellon, de que estaba procediendo contra el alcalde de Argelita, continuó el proceso por todos sus trámites; y despues de oír la acusacion del Promotor Fiscal, de la que confirió traslado al procesado, que lo evacuó defendiéndose y articulando prueba, que le fue en parte denegada, pronunció definitivo condenando á D. Vicente Bernad y Miravet en cinco años de inhabilitacion, costas y gastos del juicio, mandando remitir la causa en consulta á la Excm. Audiencia de este Territorio.

Comunicada en tiempo al Fiscal de S. M., solicitó la confirmacion del fallo consultado; pero



el defensor del procesado en la Superioridad en vez de formular su defensa, promovió un incidente pidiendo la nulidad de todo lo actuado desde que se elevó la causa á plenario en el Juzgado inferior, fundado en que el Juez de primera instancia carecia de jurisdiccion para conocer de esta causa, porque á D. Vicente Bernad y Miravet se le habia procesado por falta que se suponía haber cometido en el egercicio de sus atribuciones como Juez propio; y segun el Reglamento de Juzgados, de estos procesos correspondia conocer á la Excm. Audiencia en primera y segunda instancia.

El Fiscal de S. M., á quien se confirió traslado de esta solicitud, se opuso á ella fundado en las razones que tuvo por conveniente; y la Excm. Sala primera de esta Audiencia resolvió el incidente promovido, de la manera que aparece del siguiente decreto:

Valencia 13 de Febrero de 1858. — **RESULTANDO:** Que en este proceso se persigue el delito en que D. Vicente Bernad incurrió como alcalde de Argelita dejando de celebrar el correspondiente juicio de faltas sobre la amenaza hecha por Juan Soriano á Pascual Ibañez que éste le denunció.

Vista la disposicion segunda, artículo cincuenta y ocho del Reglamento provisional para la administracion de justicia, que designa, entre las facultades de las Audiencias, la de conocer en primera y segunda instancia de las causas que se forman contra Jueces inferiores de su Territorio por culpas ó delitos relativos al Ministerio judicial.

Visto el artículo ciento siete del Reglamento de Juzgados de primero de Mayo de mil ochocientos cuarenta y cuatro, en el que se establece que en las faltas que cometan ú omisiones en que incurran los alcaldes en el egercicio del ministerio judicial que el Reglamento provisional les concede para la decision de los juicios verbales en cantidad de doscientos reales, y llevar á efecto lo convenido en los juicios de paz, los Jueces de primera instancia no podrán proceder contra ellos, pero sí formarán las primeras diligencias que se remitirán á la Audiencia del Territorio.

Vista la regla primera de la Ley provisional para la aplicacion de las disposiciones del Código penal, que atribuye á los alcaldes y sus tenientes, en sus respectivas demarcaciones, el conocimien-

to en juicio verbal de las faltas de que trata el libro tercero de dicho Código:

Considerando: Que al limitar el citado artículo séptimo del Reglamento de Juzgados las atribuciones de los Jueces de primera instancia á las primeras diligencias contra los alcaldes por las faltas ú omisiones en que incurran en los casos mencionados, encargando su remesa á la Audiencia del Territorio, quedó establecido el principio de ser dichos alcaldes Jueces inferiores en virtud de la jurisdiccion propia que se les atribuyó para la celebracion de los referidos juicios, y como tales Jueces inferiores han de ser juzgados por aquella en los casos que comprende el mencionado artículo:

Considerando: Que al conocer los alcaldes y sus tenientes en su respectiva demarcacion en juicio verbal de las faltas de que trata el libro tercero del Código penal, obran investidos tambien de la jurisdiccion propia que les comete la regla primera de la Ley provisional; y considerados por ello Jueces inferiores en fuerza del principio sen- tado, sin poder por lo tanto ser juzgados por otro Tribunal que el superior del Territorio, deben circunscribirse los Jueces de primera instancia, en las faltas ú omisiones que aquellos cometan en tales juicios, á la formacion de las primeras diligencias, y remitirlas á la Audiencia del Territorio:

Considerando: Que D. Vicente Bernad se halla en este caso, puesto que como alcalde de Argelita no celebró juicio de faltas sobre la que le denunció Pascual Ibañez; y habiendo incurrido en tal omision como Juez inferior, corresponde ser juzgado por la Superioridad del Territorio: Se deja sin efecto el definitivo consultado, y reponiéndose la causa al estado que tenia en veintiocho de Julio último, remítase con certificacion al Juez de primera instancia de Lucena para que, como delegado de la Sala, practique la ratificacion del sumario y la devuelva para su continuacion. Lo mandaron los Señores del margen y rubricaron. — Hay cuatro rúbricas. — Licenciado Veteta.

#### JUICIO CRITICO.

Muy pocas palabras diremos acerca del caso que antecede. Lo hemos traído á las columnas de nuestra Revista, porque forma jurisprudencia sobre un punto que si no muy frecuente en la práctica, es en cambio del mayor interés, porque fija la competencia del Tribunal que debe conocer de



los procesos que se formen á los alcaldes, cuando faltan á lo prevenido en la ley respecto al modo y forma de celebrar los juicios de faltas.

Como la Ley provisional para la aplicacion de las disposiciones del Código penal, en la que se faculta á los alcaldes para conocer en primera instancia y juicio verbal de las faltas que en el territorio de su respectiva jurisdicciones se cometan, es posterior en mucho al Reglamento de los Juzgados, en el que se establece la competencia de los Tribunales para conocer de las causas que se forman contra los alcaldes, segun los casos; de aquí que en dicho Reglamento nada haya podido decirse espresamente sobre este punto.

Sin embargo, en él se deslinda de una manera harto clara que los Jueces inferiores solo pueden conocer en primera instancia de las causas contra los alcaldes, cuando éstos hayan faltado, procediendo como auxiliares ó delegados suyos; y que en las faltas que cometan ejerciendo jurisdiccion por derecho propio, las Audiencias son las que deben conocer en primera y segunda instancia de los procesos que se formen; y como las atribuciones para sustanciar y fallar en primera instancia los juicios de faltas los alcaldes, las reciben de la regla primera de la Ley provisional citada antes, es decir, como en esto proceden por derecho propio, porque reciben la jurisdiccion del poder supremo del Estado y no por delegacion de ningun Juez, creemos que solo las Audiencias pueden sustanciar y fallar, en primera y segunda instancia, las causas que se formen á los alcaldes por los escesos que cometan en la celebracion de los juicios de faltas.

El asunto, pues, aunque no espreso en la ley, lo conceptuamos de suyo claro y sencillo; y la resolucion de la Sala primera de esta Excelentísima Audiencia declarando nulo todo lo actuado por el Juez de primera instancia de Lucena, fuera de la instruccion del sumario que le está cometida por la Ley, la tenemos por notoriamente justa.

Siempre que se procese á un alcalde por faltas cometidas procediendo como Juez propio, la Audiencia es el único Tribunal competente para conocer de la causa en primera y segunda instancia. Esta la regla fija é invariable, y sobre ella han de girar todas las resoluciones.

Antonio Ballester.

### *Proyecto de ley fijando bases para el arreglo del notariado.*

#### A LAS CORTES.

Ya el Gobierno de S. M. la Reina (Q. D. G.) presentó á las Cortes de la nacion en la legislatura de 1857 el oportuno proyecto de la ley para la necesaria reforma de los oficios de la fé pública en España; pero los variados y patrióticos objetos á que entonces hubieron de convertir su recta é ilustrada atencion, impidieron que pudiesen fijarla definitivamente en asunto de tan general interés y de tan reconocida conveniencia. El Gobierno, que ha seguido observando con todo celo las necesidades de la administracion pública, torna hoy á impetrar de los Cuerpos-colegisladores el apoyo indispensable para mejorar este ramo, y verificarlo con doble confianza al notar que no se hermana afortunadamente con ninguna de las cuestiones de político empeño.

Que los Notarios, á cuya religiosidad y tino, á cuya inteligencia y honradéz se fian tan delicados intereses, vuelvan á ser lo que nuestras antiguas y venerandas leyes quisieron, es cosa en que han puesto mano en el presente siglo desde las nobles y generosas Cortes que se reunieron en Cádiz, hasta las Cortes á quien tiene el honor de dirigirse en estos momentos el Ministro que suscribe. Todas, con la superior ilustracion que les es propia, todas, sin distincion del dogma político que predominase en sus mayorías, todas tendieron á la reforma de abusos introducidos con el trascurso del tiempo que las mejores instituciones descompone ó vicia. Es verdad que tambien muestra los orígenes del daño, dando vagar á su estudio y posible remedio; y por ello el Gobierno de S. M., al reproducir el proyecto de ley fijando bases para el arreglo del Notariado, propone algunas ligeras alteraciones, teniendo en cuenta las enmiendas que llegaran á presentarse en la última legislatura, las razones publicadas desapasionadamente por la imprenta periodística, lo espuesto por individuos celosos, y los mayores datos estadísticos que ha sido posible allegar, y que verán las cortes unidos al proyecto que se les presenta.

En cuanto á las primeras bases del mismo, nada puede ni debe innovarse. No hay sino reproducir sus motivos. Suspensa desde 4 de Agosto de 1855 la provision de oficios de la fé pública, como lo habia sido diez años antes, calamitosas



enfermedades y otras causas dejaron muchos pueblos huérfanos de Notarios. Para llenar tal vacío no basta la jurisprudencia observada, según la cual se ha creado Escribanos á los propietarios de oficios que han ofrecido devolverlos á la nación á cambio voluntario de título para ejercerlos solo vitaliciamente: ni conducen las 45 provisiones que con motivo del fausto nacimiento de S. A. Serma. el Príncipe D. Alfonso, á quien Dios prospere, se acordaron por circular de 23 de Diciembre último. Continúa la escasez de Notarios, y la urgencia con que los reclaman intereses muy respetables, hoy acaso fiados á la ventura, y espuestos á confusion é informalidades perjudiciales á las familias, no consiente las precisas dilaciones de discutir una ley de las mas estensas. Por otra parte, con la autorizacion legal que se propone, podrá evitarse el notable inconveniente de legislar de una vez y desde el momento en todo lo concerniente á este ramo. Varios decretos con fuerza de ley, unos despues de otros, conseguirán que el tiempo nos ayude á suavizar la inevitable dureza de toda reforma en muchos de sus puntos, dando ocasion á que se respeten mas y mas los derechos adquiridos: á que el Estado pueda ir indemnizando con desahogo los de propiedad, tan respetables siempre; á que nuevas noticias estadísticas señalen el número y puntos de residencia mas convenientes á las notarias; en fin, á que pueda promulgarse la ley de organizacion de Tribunales, la cual por de pronto habrá de tener relacion con la presente en lo que se refiera á los escribanos actuarios.

Ante todo, y ahora como antes, se dispone la reversion al Estado de los enagenados empleos de la fé pública, cimiento principal de la obra que se emprende, sin el que no es posible de modo alguno adelantar en ella. Oficios públicos de igual ó tan delicada trascendencia como los de la magistratura judicial y administrativa: cargos que constituyen el *Señorio del Reino* y no debieron ni deben pasar al dominio y comercio de los particulares: inapreciables alhajas (como los llaman nuestros Códigos), cuya conservacion prometian con juramento los Monarcas, apartados fueron del supremo poder nacional por esquisitas y no debidas maneras, según declararon los mismos Reyes Católicos de gloriosa memoria. Vanamente se dispuso en diferentes épocas la reversion de tales oficios al Estado, y se proclamó legalmente la ineficacia de semejantes enagenaciones: lo respetable y sagrado del derecho de propiedad par-

ticular que se invocaba y la dificultad de las indemnizaciones debidas, escollos fueron donde se han estrellado mas de una vez los deseos de los Gobiernos, que veian no poder llamarse tales ni en la tan precisa eleccion de personas para confiarles el inapreciable depósito de la fé pública, ni en la reglamentacion y reforma de tan delicados cargos.

Son estos, pues, revertibles de suyo, aunque tal no se hubiera mandado en varias leyes, cédulas y testamentos reales; pero la buena fé de la nacion, que ha sabido salir airosa de empeños mayores, exige que se indemnice con justicia y equidad á los dueños de estas propiedades si las obtuvieron por título oneroso ó remuneratorio, mas no jurisdiccional. La ley de 6 de Agosto de 1811 sobre señorios, las que concedieron secretarios á las municipalidades, en vez de las escribanías de número y consejo que adquirieron para el auxilio que hoy les prestan á aquellos; el estar ya revertidas cuando se firmó el Concordato vigente las que pertenecieron al clero, conventos de monjas, maestrazgos y otras corporaciones, por los que no han podido devolverse, así como la nacion no ha podido enagenarlos de nuevo; y finalmente, el haberse revertido tambien muchas por renuncia de sus legítimos dueños ó en pago de los remates de estos oficios mientras existió tal manera de proveerlos, son cosa que amenguan en sumo grado los gastos de indemnizacion, y facilitan esta base principalísima del arreglo.

En los dos estados que hoy pueden ya unirse al presente proyecto, uno sobre el valor aproximado de los oficios de la fé pública indemnizables para su reversion, y otro sobre los oficios ya revertidos á puro celo y constancia de los Gobiernos de S. M. durante su benéfico reinado, hallarán las Cortes de la nacion los datos posibles para fijar su juicio del modo recto y atinado que siempre desean, y de que tienen dadas pruebas tan relevantes.

El valor indemnizable de las notarias y escribanías públicas, únicas á que se refiere el presente proyecto de ley, ascenderá, según los datos que se aducen, á 10 millones de reales próximamente. De modo que incluyendo en el presupuesto de ingresos un millón anual con dicho objeto, y á mas calculando en 140,000 rs. ánuos el producto del impuesto que por ahora y solo para la mas pronta estincion de las indemnizaciones se fije á los futuros Notarios por derecho de expedición de sus títulos, podrá la nacion en diez años



parcial al desempeño de escribanías de jurisdicciones privativas.

Novena. Los títulos de los notarios serán iguales en todo el reino, y conformes á minuta que dictarán los reglamentos. Quedan abolidas las prestaciones conocidas con los nombres de *fiat*, *media anata* y otras.

Por ahora se pagarán en las cajas del Tesoro público y como derechos de expedición del título de notario:

Ocho mil reales por notaría en Madrid.

Cinco mil reales por notaría en capital de provincia.

Tres mil reales por notaría en las demás poblaciones.

Décima. Los actuales escribanos de número y los notarios con fija residencia, continuarán desempeñando sus cargos, mientras no vacaren éstos natural ó legalmente. El Gobierno de S. M. queda autorizado para resolver equitativamente las reclamaciones y dudas que ocurran, previa audiencia del Consejo Real ó de alguna de las secciones competentes.

Undécima. Los notarios no serán suspensos ni separados de su oficio sino por justa causa, y en virtud de sentencia dictada por tribunal competente. Una vez separado un notario no podrá volver al ejercicio de la fé pública. Por motivos de disciplina ú otros análogos podrán los notarios ser multados hasta en cantidad de 300 rs., si la multa es impuesta por sus colegios; hasta en cantidad de 1,000 si la imponen las Salas de gobierno de las Audiencias, y hasta en cantidad de 2,000 si llegará á imponerse de Real orden por el ministerio de Gracia y Justicia.

Para las traslaciones de los notarios se observará lo prescrito en la base octava.

Duodécima. Se reglamentará lo necesario á la mejor redacción de los instrumentos públicos, legalidad, pureza y conservación de los protocolos.

Décimatercia. Habrá colegios provinciales de notarios.

Décimacuarta. Habrá archivos de recepción y archivos provinciales.

Décimaquinta. El ministro de Gracia y Justicia recomendará, para que sean premiados con distinciones honoríficas, á los notarios que lleguen á la ancianidad, habiendo sido de buen comportamiento, lo mismo que á los que presten servicios extraordinarios como el de librar los protocolos

de incendio, inundación, fuerza y otros, con arreglo á lo que se disponga.

Art. 2.º Se declaran derogadas las leyes y costumbres generales y particulares, en cuanto se opongan á la presente.

Art. 3.º El gobierno dará cuenta á las Cortes en cada legislatura del uso que haya ido haciendo de la presente ley.

Madrid 29 de Enero de 1858.—El ministro de Gracia y Justicia, José María Fernandez de la Hoz.

## Variedades.

El Sr. D. Alberto Santias, digno Magistrado de esta Audiencia, ha sido trasladado á la de Cáceres, habiéndose nombrado para la vacante que deja en la Sala tercera al Sr. D. Francisco Domingo Annes que lo era de aquel punto.

Nuestro paisano y amigo D. Juan María Zanon y Puig Samper, ha sido nombrado Juez de primera instancia del Juzgado de Torrente; y Don Juan Maicas del de Albocácer.

Se ha nombrado á D. Domingo Salazar Promotor Fiscal del Juzgado de Moncada, vacante por nombramiento de D. Luis Testor para el Juzgado de Liria.

La causa formada á consecuencia del homicidio de que en el número anterior dimos cuenta á nuestros lectores, marcha tan rápidamente cual las circunstancias lo permiten, y quizás muy pronto podamos dar cuenta de su resultado.

El proceso formado á los autores del horrible atentado que puso en peligro inminente la vida del Emperador y Emperatriz de los franceses la noche del 14 de Enero último, ha terminado. Orsini, Pierri y Rudio han sido condenados á la pena de los parricidas (á muerte), y Gomez á trabajos forzados por toda su vida. ¡Quiera la Providencia que sirva de ejemplo tan severo y justo castigo!

Por la sección de variedades y cuanto va sin firmar,  
Antonio Ballester.

EDITOR RESPONSABLE,

Licenciado D. José Marco.

Valencia: Imprenta de José Rius, calle del Milagro.—1858.